

## **PRÓLOGO**

### **INVESTIGAR EN TIEMPO DE ANIVERSARIOS**

El año 2013, marcado por la conmemoración de acontecimientos relevantes para nuestra Universidad y el desarrollo institucional del país, ha resultado un tiempo de aniversarios. Estos acontecimientos, a veces de un modo directo, otras tangencialmente, han tenido impacto en el derecho. Los cuatrocientos años de nuestra casa, más allá de la disputa sobre la fecha exacta que debiera elegirse para su celebración, implican también cuatrocientos años de enseñanza jurídica. Soy consciente de que esta afirmación puede sorprender a quienes tienen bien presente que la Facultad de Jurisprudencia fue erigida en 1791, pero no es menos cierto que el derecho se enseñaba, sin sede propia, desde los tiempos fundacionales. Estaba radicado donde se hallaban la mayoría de los saberes a comienzos del siglo XVII: en la Teología. En esa Facultad se debatía sobre la obediencia, la justicia, el castigo, el origen y los límites del poder, así como sobre la licitud de la usura y las obligaciones de los contratos.

También conmemoramos este año el bicentenario de dos hechos trascendentes, ya para la vida universitaria, ya para la historia política de nuestro país. En 1813 el deán Gregorio Funes presentó al claustro su célebre Plan de Estudios, que sería aprobado dos años después convirtiéndose en el primero de la época patria; y a fines de enero se abrieron las sesiones de la Asamblea General Constituyente, con el objetivo de declarar la independencia y dictar una constitución.

Aunque carecemos de vocación iconoclasta (de hecho el CIJS ha convocado concursos de monografías sobre los cuatrocientos años de nuestra casa y los doscientos de la Asamblea de 1813), tenemos perfectamente claro que este tipo de recordatorios quedan vacíos de contenido si se limitan a la repetición laudatoria o a la apología sin crítica. La convocatoria de los concursos tiene el objetivo de visitar estos acontecimientos desde nuevas perspectivas metodológicas, para repensarlos y revivirlos a partir de un nuevo debate. Sería fácil y menos problemático reiterar que el Plan de Estudios del deán Funes inauguró las reformas de la Revolución en la Universidad, y que sus notas de modernidad comenzaron a iluminar las

sombras de la enseñanza colonial. Sería fácil, pero esa repetición no sería completa, a la luz de investigaciones más recientes que dan cuenta de las fuertes pervivencias tradicionales presentes en el programa de estudios, y de su clara finalidad de equilibrar las novedades políticas con la defensa de un orden social que provenía de los tiempos previos.

La asociación del Plan de Estudios con la Revolución de 1810 tiene sus consecuencias sobre el modo de analizarlo. Posiblemente ningún acontecimiento, como la instalación de la Junta del 25 de Mayo en Buenos Aires, se preste tanto a la apología. Es uno de esos sucesos en los que cada época puede hallar un motivo de celebración a su medida: desde el militarismo guerrero hasta el incipiente liberalismo del ideario ilustrado encuentran allí sus referencias. Y también nos aporta una serie de ideas preconcebidas que solemos asumir sin discusión: el criollismo como causa exclusiva del levantamiento (cuando las hubo múltiples, especialmente la crisis peninsular de la Monarquía y el deseo de consolidar el libre cambio comercial); la existencia de una patria previa a la Junta sublevada por sus derechos (cuando construir la identidad colectiva demoró bastante y no fue una tarea pacífica); la idea de soberanía popular, cuando el poder se pensó revertido a los pueblos en plural y no a un pueblo en singular y en sentido moderno, tal como se argumentó en el cabildo abierto del 22 de Mayo; el vínculo de Revolución y Modernidad a través del influjo de la razón iluminista, cuando las influencias fueron de signo diverso, pero especialmente pragmáticas y tradicionales, ancladas en el pactismo escolástico; la idea de una Revolución sin sangre argumentada por los juristas, a pesar de que poco después de Mayo se fusilaba a los contrarrevolucionarios de Córdoba (entre ellos Victorino Rodríguez, el primer catedrático de nuestra Facultad).

Con la Universidad ocurre algo similar. Tenemos de su vínculo con Mayo una idea preconcebida. La potencia historiográfica de la Revolución como hecho fundante de la patria determinó lecturas y modos de entenderla. Si la Revolución separó dos etapas, lo que venía después, lo que ella generó, debía ser automáticamente rupturista. En este sentido fue analizado el Plan de Estudios del deán Funes, quien además se presentaba como el hombre que Córdoba aportaba al orden nuevo. Ese esfuerzo por acoplar la Universidad a la Revolución no hizo más que distorsionar el pasado. El Plan de Funes tiene materias nuevas y una justificación encendida de signo revolucionario, pero una lectura detenida y sin prejuicios nos demuestra que son más las continuidades que los cambios, o que estos son más leves que el discurso que los introduce. La revolución política no fue una revolución en los estudios. No podía serlo, como tampoco lo

fue en el orden social de los primeros años. Las líneas de enseñanza de la regencia franciscana y el clero secular, incluso varios de los textos y autores utilizados, pervivieron: el rigorismo de la Teología Moral y Escolástica, el texto de Vinnio para el Derecho Romano, la utilización de las leyes españolas. Cambios hubo, por supuesto, y fundaron la idea de la separación de dos épocas en la vida universitaria. Pero el libro de Devoti para el Derecho Canónico, con su apego a las doctrinas papales, no implicaba modernidad; el Derecho Natural y de Gentes por los compendios de Grocio y Puffendorf redactados por Heineccio, a primera vista una irrupción del racionalismo, en realidad se presentaba templado por la prudencia y desgajado de las ideas más peligrosas para el orden social; la Legislación Patria, en la práctica, parecía más un deseo que una realidad. Y la obra del dominico Antonio Valsechi para la Teología Dogmática, que aparecía por primera vez en la Universidad, cumplía la función de dique para contener la religión. Si la Revolución había alterado el sistema político, no debía alterar la constitución social de raíz católica. Si el peligro radicaba en las doctrinas “monstruosas y pestilentes” de algunos filósofos modernos (así las nombra Funes en el Plan), el libro de Valsechi debía servir de muro para detener sus argumentos.

Se han querido ver dos Córdobas frente a Mayo. La de Liniers, Rodríguez y Orellana, monárquica y conservadora; y la de Funes, ilustrada y revolucionaria. ¿En verdad eran tan distintas? Más allá de los reacomodamientos personales que supuso el orden nuevo, realizados por motivos que no siempre contemplaban convicciones, ¿tenían diferencias de fondo o apenas se separaban por los matices? Una, la de Liniers, se opuso con las armas a una Revolución que miró con espanto; la otra, la de Funes, buscó encauzarla en el orden católico para que no se disolviera la constitución social conocida hasta entonces. Ese es el objetivo de Funes en el Plan de Estudios para la Universidad y en muchos de sus escritos posteriores a 1810, cuando se eliminan los artificios verbales de su discurso y quedan las ideas desnudas.

Algo similar, aunque no entraremos en detalles, ocurre con la visión historiográfica de la Asamblea de 1813. A fuerza de reiteraciones que invisibilizan los matices, su comprensión es dominada por la potencia de sus logros, y mucho más, por la de sus intenciones. El objetivo de declarar la independencia y dictar la constitución a veces se erige en argumento de modernidad por sí mismo, sin preguntarse qué independencia y qué constitución se pretendía. El tinte ilustrado, liberal e igualitario de sus decretos, como la libertad de vientres, la supresión del tormento y la abolición de los títulos de nobleza, que por cierto comprendemos como un golpe a la socie-

dad corporativa y jerárquica de la colonia, no debieran esconder los fuertes lastres de ese pasado que se conservaban (y que ni siquiera se ponían en discusión), muy presentes en los mecanismos de representación y en las fórmulas de juramento de las nuevas autoridades.

Consideramos que los aniversarios deben servir para proponer miradas historiográficas menos laudatorias y más complejas, convencidos de que la complejidad no desmerece la celebración y le hace más justicia al pasado porque no lo minimiza. No participamos de una noción “evolutiva” del derecho y las instituciones, y por tanto de la idea tranquilizadora de que el derecho “progresas” en línea recta, del pasado al presente, perfeccionándose. Frente a esta noción, que ubicaría a nuestro Estado, nuestras leyes y nuestra justicia en el más alto escalón civilizatorio, proponemos otra que considere las discontinuidades, los contextos, las relecturas de las tradiciones y las nuevas significaciones jurídicas en espacios locales diferentes. Observado de este modo, nuestro derecho pierde el apoyo del pasado para valerse por sí mismo. No es ni mejor ni peor que los anteriores, no es una lenta preparación que se perfecciona con el tiempo.

¿Para qué investigamos, más allá de los objetivos específicos de nuestros trabajos? Sin ánimo de dar una respuesta única a un tema que no la admite, considero que la investigación bajo el modelo sugerido y la confrontación de sus resultados contribuyen a la formación de consensos democráticos o de disensos razonados. Si evitamos justificar el derecho y las instituciones a través de datos indisponibles que anulan el debate, si evitamos el recurso a la historia o a la naturaleza como sus fuentes legitimadoras, al momento de discutir encontraremos que estamos solos con nuestros argumentos. Asumirlos como propios, deudores de nuestras posiciones y nuestros intereses, nos obliga necesariamente a la cautela. Nos obliga a contrastarlos y a aceptar otros puntos de vista, tan legítimos y válidos como los nuestros. Nos obliga, en definitiva, a un ejercicio democrático.

Este tipo de modelos, que niegan aval al pasado, la naturaleza o la religión para fundar el derecho, suelen ser acusados de relativistas. Sin embargo no nos enfrentamos a un relativismo de valores sino a un marco plural de planteos y métodos, lo que no impide de ninguna manera el compromiso científico. En todo caso, el pluralismo metodológico que rechaza el recurso a ese tipo de avales para el derecho, acepta que trabajamos con valores y que estos deben confrontarse con los ajenos. No deja de ser un acto de valentía asumirlo. Una valentía que empuja a la responsabilidad. Nuestras posiciones deben ser cautelosas porque no se apoyan en verda-

des absolutas ni permanentes, y esa cautela favorece la construcción de acuerdos<sup>1</sup>.

Bajo estos postulados iushistoriográficos, que pueden extenderse a otras disciplinas, un Centro de Investigaciones de una Facultad de Derecho debe fomentar el pensamiento jurídico crítico y la pluralidad de miradas, ser una institución que sin temerle a la discusión académica la instrumente a favor de consensos democráticos y disensos razonables. Un Centro que favorezca la libertad de pensar y no lastre la discusión con argumentos de autoridad, en el que sus investigadores trabajen convencidos de que el debate intelectual y la multiplicidad metodológica son herramientas indispensables para hacer ciencia.

El cumplimiento de estas finalidades, indudablemente, requiere de un contexto político plural y democrático. De otro modo el esfuerzo es estéril. La deliberación democrática favorece el pluralismo teórico. En este tiempo de aniversarios, sin desmerecer la importancia de los otros, quiero resaltar entonces aquel que se constituye en presupuesto de todos los demás, porque garantiza el marco adecuado para pensar con libertad y tolerancia. El 10 de diciembre nuestra democracia cumple treinta años de ejercicio sin interrupciones, en lo que constituye el mayor ciclo institucional desde la sanción de la ley Sáenz Peña, que permitió elecciones sin fraude. Ese ejercicio ha tenido altos y bajos, luces y sombras, y también debe ser pensado críticamente, pero sin duda representa un verdadero motivo de celebración, considerando la triste historia de alteraciones constitucionales en la Argentina del siglo XX.

¿Qué elegimos celebrar, entonces, en este año de conmemoraciones múltiples? Yo elegiría la posibilidad de poder reflexionar en libertad y de mirar la historia sin mitos desde un presente democrático; la posibilidad de observar críticamente el pasado para aprender a observar críticamente el presente. Nuestro Centro de Investigaciones, creado en 1985, tiene casi la misma edad de este ciclo constitucional. Construido pacientemente con el esfuerzo colectivo de decanatos y direcciones de diverso signo, con una vitalidad que se debe al trabajo constante de numerosos investigadores que han dedicado y dedican su tiempo a pensar para los otros, hoy radica en su sede proyectos que reflejan una gran pluralidad de visiones epistemológicas, políticas y metodológicas sobre el derecho y las ciencias sociales. Este Centro de Investigaciones hoy publica su Anuario XIV, donde par-

---

<sup>1</sup> Quien se interese por la cuestión bajo esta perspectiva, puede consultar el epígrafe "Una nota sobre relativismo metodológico y relativismo moral", en HESPANHA, A. *Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio*, Tecnos, Madrid, 2002, pp. 55-57.

te de esa pluralidad se encuentra reflejada. Sin perspectiva histórica quizás nos parezca poco. Pero es mucho, y es un excelente motivo para celebrar el presente.

*Esteban F. Llamosas*  
DIRECTOR DEL CIJS